



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

FSM 34505/2018/TO1/21

///nos Aires, 16 de abril de 2024.

**AUTOS Y VISTOS:**

Para resolver en el presente **Legajo de Identidad Reservada FSM 34505/2018/TO1/21**, formado en el marco de la causa **FSM 34505/2018/TO1 (3036)** caratulada: **“ATACHAHUA ESPINOZA, CARLOS SEIN Y OTROS S/INF. LEY 23.737”**, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 3.

**Y CONSIDERANDO:**

**I.-** Que Diego Gonzalo ESPASANDÍN, con el patrocinio letrado del Dr. Julio C. Gabrielli, solicitó se le restituya el dinero habido en ocasión de llevarse a cabo el registro de su domicilio, sito en calle Pedro Goyena 1340, 4º piso, Dpto. “B” de esta ciudad, en función de encontrarse firme el auto de sobreseimiento dictado a su respecto.

En tal sentido, manifestó que los doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y un dólares estadounidenses (US\$ 263.681), diez mil quinientos cuarenta euros (€10.540), sesenta libras esterlinas (£60) y cuatrocientos veinte reales (RLS 420) secuestrados en aquella oportunidad, constituyen el ahorro familiar de su trabajo profesional como abogado y los de su esposa como contadora pública. Asimismo, señaló que el origen legítimo de aquellas sumas se encontraba acreditado en esta incidencia mediante las constancias documentales particularmente individualizadas y analizadas en su presentación, lo que demostraba que no existía vinculación alguna entre el dinero secuestrado y los hechos de la causa principal, los que habrían sido cometidos por otras personas susceptibles de juzgamiento en última instancia por este Tribunal Oral.

Por otra parte, destacó que de las medidas de prueba que se encontraban pendientes en la etapa de instrucción ya habían sido producidas, y que ninguna de ellas arrojó como resultado elemento



alguno que pusiera en duda la titularidad del dinero en cuestión. En virtud de ello, consideró que correspondía aplicar lo normado por los arts. 1911, 1916 y 1917 del CCCN.

A su vez, alegó que no existía base legal alguna para mantener el desapoderamiento de dichos bienes, con el perjuicio patrimonial, personal y familiar que ello le significaba, por lo que solicitó su inmediata restitución con basamento en los derechos de propiedad, debido proceso, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, defensa en juicio, entre otros.

Por último, manifestó que asumía el compromiso de abonar la suma de sesenta mil dólares estadounidenses (US\$ 60.000) del dinero de su propiedad cuya restitución solicitaba -el cual se había fijado como pena de decomiso-, y la suma de dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil pesos (\$2.457.000) -fijado como el monto de la multa-, en el marco del acuerdo de juicio abreviado suscripto por su padre, Carlos Alberto ESPASANDIN, con el representante del Ministerio Público Fiscal, una vez que dicha sentencia quede firme.

**II.-** Que corrida la vista al Sr. Fiscal General de Juicio, el mismo dictaminó que correspondía hacer lugar a la devolución total del dinero secuestrado en autos.

Ello así, atento que de la documentación agregada en el presente Legajo surgía que en el período comprendido entre los años 2014 y 2020, los ingresos del grupo familiar acreditados se correspondían con la suma total de veintidós millones ciento diecisiete mil doscientos siete pesos con once centavos (\$22.117.207,11), los cuales -al tipo de cambio oficial al cierre de cada ejercicio- se correspondían con la suma de seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve dólares estadounidenses con noventa y dos centavos de dólar (U\$S 648.589,92). Asimismo, señaló que de los informes oportunamente solicitados al Fisco Nacional podía considerarse cierto que el dinero efectivo secuestrado estuviere en su poder, sin perjuicio que de las declaraciones juradas de bienes





Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

FSM 34505/2018/TO1/21

personales de Diego Gonzalo ESPASANDÍN no figurara como declarado formalmente ante la AFIP-DGI.

Señaló que no correspondía el decomiso de tales valores por encontrarse documentalmente probado que el dinero secuestrado fue adquirido a título oneroso y de buena fe.

Por último, dictaminó que no correspondía hacer lugar al compromiso asumido por la parte en su presentación de abonar la suma de sesenta mil dólares estadounidenses (US\$ 60.000) y cuatrocientos cincuenta y siete mil pesos (\$457.000) -en función de las penas de decomiso y multa oportunamente impuestos a Alberto Carlos ESPASANDÍN-, toda vez que la cuestión incidental no se encontraba sujeta a los hechos juzgados en el marco de la causa principal.

**III.-** Que, corrida la vista a la parte querellante, la Unidad de Información Financiera solicitó se rechace la solicitud de devolución formulada por Diego Gonzalo ESPASANDÍN, sosteniendo que la documentación aportada ya había sido catalogada como insuficiente a tal efecto, atento que la misma consistía en certificaciones de ingresos basados en declaraciones juradas por trabajo en relación de dependencia y autónomo efectuada por Diego Gonzalo ESPASANDÍN y su esposa, bajo su exclusiva responsabilidad.

Al respecto, destacó que la contadora actuante había señalado expresamente que su certificación no representaba la emisión de un juicio técnico respecto de la información allí contenida y que allí sólo constataban ingresos en pesos argentinos y de ninguna forma certificaba que los cónyuges hubieran tenido ingresos en moneda extranjera, indicando que la única tenencia en dólares que Diego Gonzalo ESPASANDÍN y su pareja habían podido acreditar ya les había sido devuelta.

Asimismo, señaló que la documentación aportada consistía en certificaciones de ingreso en pesos sin tener en consideración ni calcular egresos, por lo que la misma se alejaba de



poder reflejar la realidad económica de ese grupo familiar durante los períodos indicados en esa documentación, lo cual impedía otorgarle entidad suficiente y mantenía las sospechas sobre el origen del dinero, lo que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos aquí imputados, obligaba a rechazar la pretensión de la defensa.

Seguidamente, remarcó que las certificaciones tampoco explicaban cómo se habían obtenido las divisas extranjeras, lo que teñía un nuevo manto de sospecha sobre las sumas secuestradas, concluyendo que el solicitante no contaba con elementos suficientes que acredite el origen lícito del dinero cuya devolución pretende.

A continuación, manifestó que resultaba claro que el dinero secuestrado pertenecía a Alberto Carlos ESPASANDÍN, quien manifestó desde un primer momento dicha circunstancia, pese a posteriormente cambiar su versión de los hechos para sustraer dichas sumas dinerarias del eventual decomiso.

A su vez, indicó que de la lectura del escrito de Diego Gonzalo ESPASANDÍN surgía que se pretendía abonar el decomiso plasmado en el acuerdo de juicio abreviado que suscribió su padre con el Ministerio Público Fiscal con el dinero que sostenía era de su titularidad y que si aquellos habían acordado decomisar la suma de sesenta mil dólares estadounidenses (US\$ 60.000), ello permitía sostener que ese dinero formaba parte del producto o el provecho de las maniobras de lavado de activos investigadas, lo que habilitaba a petitionar el decomiso de la totalidad de dichas sumas.

Por otro lado, resaltó que el deber de realizar acciones concretas para lograr la identificación, localización, embargo y decomiso de bienes y el recupero de activos de origen ilícito formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico (conf. art. 23 del CP; ley 20.785; en las normas que regulan los regímenes especiales –aduanero, estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo y prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, entre otras; en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas –ley





Poder Judicial de la Nación

## TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

FSM 34505/2018/TO1/21

24.072-; la Convención Interamericana contra la Corrupción –ley 24.759-; la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolos Complementarios –ley 25.632-; la Convención Interamericana Contra el Terrorismo –ley 26.023-; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción –ley 26.097-; las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera –GAFI-; entre otros), de manera que el Poder Judicial de la Nación debía adoptar las medidas necesarias a tal fin, destacando que el incumplimiento o inobservancia del mismo podía derivar en consecuencias de rechazo internacional.

Por último, hizo reserva de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y del caso federal.

**IV.-** Que, asiste razón a esta última puesto que atento el estado procesal de las actuaciones principales FSM 34505/2018/TO1, no corresponde hacer lugar a la solicitud de devolución de dinero que le fuera oportunamente secuestrado en autos a Diego Gonzalo ESPASANDÍN, toda vez que lo peticionado resulta, por el momento, prematuro.

En efecto, son válidas las críticas efectuadas por la querellante respecto de la certificación contable presentada como acreditación del origen de los fondos cuya devolución se solicita, dado que la contadora actuante ha señalado expresamente que su certificación no representaba la emisión de un juicio técnico respecto de la información allí contenida y que la misma consiste meramente en una certificación de ingresos en pesos argentinos, sin tomar en consideración ni calcular egresos, por lo que dicha certificación no podría reflejar la realidad económica del grupo familiar durante los períodos indicados en la misma.

Ello así, por cuanto además la solicitud de devolución de dinero aquí efectuada por Diego Gonzalo ESPASANDÍN incluye, por un lado, el compromiso expresamente manifestado por el nombrado de abonar la suma de sesenta mil dólares estadounidenses (U\$S60.000) y cuatrocientos cincuenta y siete mil pesos (\$457.000),



en función de las penas de decomiso y multa oportunamente impuestos a Alberto Carlos ESPASANDÍN mediante sentencia de fecha 21/02/2024.

Al respecto, sin perjuicio de lo manifestado por el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen en relación a que esta cuestión incidental no se encuentra sujeta a los hechos juzgados en el marco de la causa principal, cabe destacar que la sentencia recaída respecto de Alberto Carlos ESPASANDÍN no se encuentra firme en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte querellante –Unidad de Información Financiera-, el cual fue concedido por este Tribunal Oral mediante resolución de fecha 07/03/2024 y se encuentra tramitando actualmente por ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal bajo el CPE N° 34505/2018/TO1/75/CFC4.

Sumado a ello, cabe tener presente que la escritura de compraventa respecto del inmueble sito en calle Pedro Goyena 1340, 4° piso, Dpto. “B” de esta ciudad, fue celebrada con fecha 10/07/2015 entre Diego Gonzalo ESPASANDÍN y Maribel DEL ÁGUILA FONSECA (cfr. Escritura N° 025381544, obrante en la solapa “Documentos Digitales” del Sistema de Gestión Judicial Lex 100 en el marco de las actuaciones principales FSM 34505/2018/TO1).

En este sentido, cabe destacar que, de conformidad con el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el Ministerio Público Fiscal con fecha 29/12/2022, obrante en los autos principales FSM 34505/2018/TO1, la nombrada Maribel DEL ÁGUILA FONSECA se encuentra imputada en el marco de la causa principal en orden a los delitos de asociación ilícita (art. 210 del CP) y lavado de activos, agravado por su habitualidad y por ser realizado de forma organizada (art. 303, inc. 1°, agravado por el inc. 2°, punto “a” del CP), todos ellos en concurso real (art. 55 del CP), encontrándose próximo a comenzar el debate oral y público a su respecto (art. 359 CPPN), con el consecuente dictado de la sentencia y el eventual decomiso de bienes que pudiera recaer sobre la nombrada.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3

FSM 34505/2018/TO1/21

En virtud de todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar a lo solicitado por Diego Gonzalo ESPASANDÍN en relación a la devolución del dinero que le fuera oportunamente secuestrado en autos, a saber: doscientos noventa y siete mil novecientos ochenta y un dólares estadounidenses (U\$S 297.981), diez mil quinientos cuarenta euros (€10.540), sesenta libras (£60) y cuatrocientos veinte reales (RLS 420) (cf. acta de secuestro del inmueble sito en la calle Pedro Goyena N° 1340, 4° Piso, Depto “B”, de esta ciudad).

Por todo ello, el Tribunal,

**RESUELVE:**

**I.- NO HACER LUGAR** a la solicitud de devolución de dinero efectuada por **Diego Gonzalo ESPASANDÍN** con el patrocinio letrado del Dr. Julio C. Gabrielli.

**II.- TENER** presentes las reservas de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y del caso federal efectuadas.

**III.- SIN COSTAS** (art. 531 y ss. CPPN).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, cúmplase.

KARINA ROSARIO PERILLI

JUEZ DE CAMARA

JORGE ALEJANDRO ZABALA

JUEZ DE CAMARA

LUIS ALBERTO IMAS

JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

EDUARDO E. BOTELLO

SECRETARIO

En igual fecha se libraron cédulas electrónicas. Conste.-



EDUARDO E. BOTELLO

SECRETARIO

